

Regenerar la gobernanza en tiempos caóticos

Vivimos tiempos caóticos de gran desorden y desarticulación en el manejo de los asuntos públicos.

Estamos navegando en aguas turbulentas sin una visión clara, sin planes concretos para darle dirección a las reformas impostergables de la economía, la educación, la salud y la seguridad pública, lo que nos deja a la deriva. Esta realidad se agrava por el desgaste y la distorsión de la institucionalidad pública.

A estos desafíos se le suma la crisis del sistema energético y el deterioro de la función judicial. La discusión pública se ha centrado en las denuncias y los cuestionamientos sobre las deficiencias del sistema eléctrico, de falta de transparencia e integridad de los procesos judiciales y las fallas en el manejo de las investigaciones criminales. Las interrogantes y dudas expresan el desencanto de la sociedad ante las deficiencias y los pobres resultados del desempeño del gobierno en varios frentes. Crece la desconfianza y se acentúa la percepción de los ciudadanos de que el gobierno ha perdido capacidad de conducir la sociedad, no

sabe qué hacer frente a numerosos problemas o hace poco ante ellos.

En este contexto, la Encuesta de Percepción de la Corrupción en Puerto Rico, realizada por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa como parte del estudio de investigación sobre los desafíos de la corrupción para la gobernanza y la economía, plantea que el desempeño de las instituciones gubernamentales es pobre, que los ciudadanos no confían en la gestión del gobierno y que las capacidades institucionales para prestar servicios está cuestionada. Con relación a la función judicial, el 87% de los encuestados plantean que no existe un procedimiento independiente y transparente para seleccionar los jueces y el 80% de los participantes de la encuesta opina que los jueces no están protegidos de interferencia política. Asimismo, en cuanto a la efectividad de las agencias del orden público y la Policía, cerca del 80% de los encuestados opina que estas agencias no son efectivas.

La importancia de un andamiaje de justicia sólido reside en que contri-

buye de manera esencial a preservar el Estado de derecho, al fomento de la gobernabilidad, la estabilidad y el crecimiento económico y permite la resolución de todo tipo de controversias dentro de un marco estructurado y ordenado. La transparencia y la lucha contra la corrupción en el sistema judicial es un requisito esencial para exigir el derecho a la información en todos los poderes del estado.

El establecimiento de un sistema judicial eficiente y eficaz que proteja los derechos humanos, facilite el acceso de todos y todas a la justicia y proporcione recursos transparentes y objetivos, es un valor considerado fundamental al cual todos tenemos la obligación de preservar y contribuir a su mejora continua.

Para superar el déficit de confianza, se requiere mejorar la capacidad institucional y directiva con el fin de lograr que el gobierno funcione de manera efectiva para atender el grave problema de las deficiencias de capacidad del sistema judicial. Para ello hay que atender las deficiencias en dos niveles: a nivel de instituciones - infraestructura, estructura organizativa, reglas, sistemas y procesos - y a nivel individual - competencias, conocimiento, aptitudes, habilidades y comportamiento.

Para encaminar las reformas es necesario hacer frente a aspectos puntuales tales como los nombramientos, la educación inicial y continua; las evaluaciones profesionales y la disciplina de jueces, fiscales y procuradores.

Para fortalecer la transparencia, la integridad y la capacidad de la función judicial es necesario atender los nuevos desafíos que enfrenta el sistema que son cruciales para la calidad y eficiencia de su desempeño. Las reformas por emprender han de realizarse con miras a lograr un equilibrio adecuado entre los valores de la independencia judicial y la responsabilidad de jueces, fiscales y procuradores indispensables para el buen funcionamiento del sistema judicial que sea capaz de propiciar la gobernabilidad, el desarrollo inclusivo, la prestación de servicios adecuados para los ciudadanos y el logro de la justicia.

Necesitamos darle nuevo orden y dirección a las situaciones caóticas que vivimos para superar la dificultad y aprovechar la oportunidad para lograr avanzar en la dirección de la gobernabilidad, el desarrollo social y económico, el fomento de la inversión, la creación de empleos y la vigencia de los derechos ciudadanos para construir un mejor país.



**Dra. Eneida
Torres
de Durand**

Directora
Ejecutiva Centro
de Gobernanza
Pública y
Corporativa